RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CINCUENTA CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Rad No. 2020-00304

Pasa el juzgado a resolver el recurso de reposición y en subsidio el de alzada interpuesto por el demandado José Florentino Suárez Gil en contra de los numerales 2.5 y 3.5 del auto fechado el 21 de septiembre del año anterior, a través del cual se decretaron pruebas y fue fijada fecha de audiencia concentrada.

ANTECEDENTES.

1. El recurso¹

Señala el opositor que en civil opera el principio de justicia rogada, el cual ha de entenderse como el hecho de que la actividad probatoria recaerá siempre sobre los hechos afirmados por las partes, recayendo en aquellas dicha carga y sin que el juez pueda tomar en consideración alguna prueba si al menos uno de los litigantes no lo solicita ni pide su práctica. Sobre tal afirmación indica que para el caso la parte demandante nunca solicitó la práctica de ninguna prueba pericial en su escrito de demanda, por lo que mal puede el Juzgado ordenarla en la forma en como lo hizo en el auto reprochado.

Aduce que sumado a lo anterior se impuso al demandado la carga de la comparecencia de la perito Sandra Milena Castaño, cuando conforme el decreto realizado por el Despacho esta carga debe ser cumplida por su contraparte, precisiones estas que deben conllevar necesariamente a revocar las determinación impugnadas, y en caso de persistir en la decisión conceder el recurso vertical ante el superior.

2. Oposición²

Indica el apoderado de la demandante que contrario a lo advertido por su contraparte las decisiones objeto del recurso se encuentran ajustadas a derecho. En cuanto al numeral 2.5 manifestó que el dictamen pericial aportado con la demanda cumple con los requisitos del artículo 226 del Código General del Proceso, además de que fue aportado en la oportunidad establecida con por la ley, el que tiene como objeto demostrar el precio real del inmueble en controversia para el año 2013, año en el que se suscribió la escritura pública No. 03439 del 26 de diciembre de 2013 de la Notaría 43 del Círculo de Bogotá, lo que indica que es conducente, además de que tiene sustento en los hechos de la demanda.

Respecto al numeral 3.5 indica que si bien es cierto la parte actora fue quien aporto el dictamen, la demandada fue la que bajo las reglas del art. 228 *ib* solicitó su contradicción en audiencia, aun cuando es la demandante la más interesada en que la auxiliar asista a la diligencia, de ahí que el auto debe confirmare y negarse la alzada al no encontrarse las decisiones objeto del recurso enlistadas en el art. 321 del Código General del Proceso.

CONSIDERACIONES

¹ Archivo No. 27

² Archivo No. 28

Bajo lo previsto en el art. 318 del Código General del Proceso, el recurso de reposición tiene como objetivo que el Juez examine sus propios autos, ello con el fin de volver sobre el tema que aduce el impugnante, a fin de que se revoquen o se reformen en la perspectiva de corregir los yerros en que se pudo incurrir al proferirlos.

Así las cosas, de cara a las piezas procesales que hacen parte del expediente, y las reglas probatorias que prevé la codificación previamente señalada, encuentra el Juzgado que el recurso que aquí se decide, se encuentra llamado a prosperar parcialmente por las razones que pasan a explicarse.

Conclusión a la que se llega si en cuenta se tiene que contrario a lo indicado por la recurrente, en la demanda la parte actora **si** hizo referencia a que como anexo allegaba un “*Avalúo comercial del bien inmueble objeto de la demanda de fecha 07 de noviembre de 2019 por parte de la ingeniera catastral y Geodesta SANDRA MILENA CASTAÑO SÁNCHEZ*” tal y como se observa en el acápite denominado “*DOCUMENTALES APORTADAS*” que hace parte del título “*PRUEBAS*”³, laborío este que fue aportado como se advierte del archivo denominado “*02AnexosAportadosLink.pdf*” de la página 188 a 231.

Y si eso es así, fácil es concluir que dicha prueba fue aportada en el término que tiene la parte actora para el efecto tal y como lo prevé el artículo 227 del Código General del Proceso, aquella cumple los presupuestos del art. 226 *ib*, esta resulta útil, necesaria y conducente a fin de resolver el problema jurídico puesto a consideración de esta instancia, y no requiere para su decreto otro tipo de presupuesto, precisiones que sin más llevan a confirmar el numeral 2.5 del auto recurrido.

La circunstancia de que el actor desprevenidamente hubiere relacionado la prueba técnica aportada como prueba documental no hace que aquella parte pierda su naturaleza, no se olvide que como medio de prueba está llamado a entregar elementos de convicción al juez sobre un aspecto técnico relevante de acuerdo a los hechos que impartan la proceso cuya importancia fue explicada con claridad por el tratadista Devis Echandia en su obra compendio de la prueba judicial

“El juez es un técnico en derecho, pero carece generalmente de conocimiento sobre otras ciencias y sobre cuestiones de arte, de técnica de mecánica, de numerosas actividades prácticas que requieren estudios especializados o larga experiencia. En presenCia de una cuestión de éstas, el Juez se ve en la necesidad de recurrir al auxilio de expertos, para que lo ilustren adecuadamente, en su condición de peritos.”

Para el caso ninguna duda hay acerca de que el denominado “Avaluo Comercial” es una prueba técnica y no una prueba documental, en tanto aquella fue elaborada por un experto en valuación de bienes inmuebles y su trabajo lo desarrolló a partir de la aplicación de dos métodos particulares (de comparación de mercado y de reposición) empleando una serie de fórmulas para dar su concepto sobre el valor de determinado bien; en contraste no puede verse como un simple documento declarativo, para dar cuenta de un hecho.

En sentencia C –124 DE 2011 recordó la corte que “*La doctrina tradicional en materia probatoria confiere al dictamen pericial una doble condición: Es, en primer término, un instrumento para que el juez pueda comprender aspectos fácticos del asunto que, al tener*

³ Archivo No. 01

carácter técnico, científico o artístico, requieren ser interpretados a través del dictamen de un experto sobre la materia de que se trate. En segundo lugar, el experticio es un medio de prueba en si mismo considerado, puesto que permite comprobar, a través de valoraciones técnicas o científicas, hechos materia de debate en un proceso. Es por esta última razón que los ordenamientos procedimentales como el colombiano, prevén que el dictamen pericial, en su condición de prueba dentro del proceso correspondiente, debe ser sometido a la posibilidad de contradicción de las partes(...)”

Ahora en cuanto a la orden contenida en el numeral 3.5 en concreto en punto a la carga que se impuso para la comparecencia de la perito Sandra Milena Castaño Sánchez a la diligencia programada en auto anterior, encuentra el Juzgado que esta se encuentra llamada a ser revocada.

Conclusión a la que se llega en que si bien fue la parte demandada la que solicitó su comparecencia dentro del término que tuvo para contradecir el dictamen aportado por la parte actora con su demanda bajo las reglas del art. 228 del Código General del Proceso a efectos de interrogarlo, lo cierto es que, por un lado, se trata de un dictamen de parte en los términos del art. 227 *ib*, por lo que dable resulta que la asistencia del profesional especializado sea carga del litigante que lo aportó, y por el otro, que justamente su no presencia en la diligencia trae consecuencias adversas a quien lo trae y no que quien lo contradice, como lo expresa la parte final del inciso 1 del artículo 228 *ib* que señala “(...) Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor”.

Luego entonces al margen del interés que le asiste al demandado de interrogar al perito, irrazonable resulta que se le imponga a este la carga de hacerlo comparecer a la diligencia si perdida se valor la sufre quien lo aporta si el experto no comparece.

Entonces, el Juzgado accederá parcialmente al recurso que aquí se decide, únicamente en lo que tiene que ver con la parte final del numeral 3.5 del auto del 21 de septiembre del año 2022, y mantendrá la decisión adoptada en el numeral 2.5 de dicho proveído por las razones atrás expuestas. En cuanto al recurso de alzada, este se negará por improcedente, dado que la decisión mantenida no se encuentra enlistada en el art. 321 *ib* ni en norma especial.

Por lo expuesto, el Juzgado **DISPONE:**

1. **REVOCAR** por las razones expuestas en este proveído, la decisión contenida en el numeral 3.5 del auto fechado el 21 de septiembre de 2022, únicamente en lo que corresponde a precisar que la carga allí impuesta frente a la comparecencia del perito a la diligencia a allí señalada, recae en la parte demandante y no como allí se señaló.
2. **CONFIRMAR** el numeral 2.5 de la providencia venida de señalar.
3. **NEGAR** por improcedente ante el superior el recurso subsidiario de alzada.
4. **Poner de presente a las partes y demás interesados, que lo aquí decidido en nada afecta la audiencia programada en el auto venido de señalar.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

**PILAR JIMÉNEZ ARDILA
JUEZ**

JST

**Firmado Por:
Pilar Jimenez Ardila
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 050
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **26798f976c38ccd781d53ad1aa7169e1df4aa8a2fc7d57bf26782226ed2717ea**

Documento generado en 27/01/2023 03:27:01 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**